

## La protesta popular venezolana entonces y ahora: ¿cambios en la política de la calle?

### *Popular protest in Venezuela, present and past: changes in the policy of the street?*

Margarita López Maya

#### Resumen

En este artículo se realiza un análisis comparativo de las acciones colectivas de dos períodos históricos: el primer Gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) y los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2002). Si bien con reveladoras diferencias, especialmente referidas a su complejidad, la protesta venezolana de estos dos tiempos guarda importantes similitudes. El número, las modalidades y la naturaleza de las movilizaciones son muy semejantes, aunque la protesta del primer período es menos diversa y compleja, y más violenta que la protesta que se desarrolla en el segundo período. ¿A qué obedece la semejanza? ¿Qué procesos explican las diferencias? ¿Qué ideas o hipótesis sobre el proceso sociopolítico de la sociedad podemos extraer de ello? El artículo está estructurado de la manera siguiente: en la primera parte se procede a caracterizar la protesta realizada durante el primer Gobierno de Caldera. En la segunda se hace lo mismo para los primeros años del Gobierno de Chávez. En las partes tercera y cuarta se identifican los factores impulsores de esas acciones colectivas en ambos gobiernos. Se cierra con conclusiones comparativas que dan respuesta a las interrogantes planteadas.

#### Palabras clave:

Protesta popular; Movimiento estudiantil; Movimientos sociales; Política de la calle; Primer Gobierno de Caldera; Gobierno de Chávez.

#### Abstract

A comparative analysis mass action in two periods in time: the first government of Rafael Caldera (1969-1974) and the first years in the government of Hugo Chávez Frías (1999-2002). In spite of marked differences, specifically regarding their complexity, protests in Venezuela during these two time periods hold significant similarities. The number, modalities and nature are quite similar though the protest during the first timeframe is less diverse and complex yet more violent than that of the second period in time. Why the similarities? What processes explain the differences? What ideas or hypotheses on sociopolitical processes of society may be derived from them? This article is structured as follows: the first part addresses protests in the first term of Caldera. Part two does the same regarding the first years of Chávez's term. Parts three and four identify the factors giving rise to mass actions in both governments. The article ends with comparative conclusions aimed at answering the above questions.

#### Key words:

Popular protest; Student action; Social action; Politics in the streets; First government of Caldera; Government of Chávez.

## INTRODUCCIÓN

Un análisis comparativo de las acciones colectivas de dos períodos históricos que a primera vista parecieran muy distintos, el primer Gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) y los primeros años de Gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2002), depara algunas sorpresas. Si bien con reveladoras diferencias, especialmente referidas a su complejidad, la protesta venezolana de estos dos tiempos guarda importantes similitudes. El número, las modalidades y la naturaleza de las movilizaciones son muy semejantes, aunque la protesta del primer período es menos diversa y compleja y más violenta que la protesta que se desarrolla en el segundo período. ¿A qué obedece la semejanza? ¿Qué procesos explican las diferencias? ¿Qué ideas o hipótesis sobre el proceso sociopolítico de la sociedad podemos extraer de ello?

En este artículo se presentan unas primeras respuestas a estas interrogantes a través de un análisis de carácter exploratorio de los dos períodos en cuestión. En la primera parte se procede a caracterizar la protesta realizada durante el primer Gobierno de Caldera. En la parte 2 se hace lo mismo para los primeros años del Gobierno de Chávez. En las partes 3 y 4 se identifican los factores impulsores de esas acciones colectivas en ambos gobiernos. Se cierra con conclusiones comparativas.

El enfoque conceptual utilizado, como lo hemos desarrollado en anteriores estudios, parte de reconocer a la protesta o acción colectiva como una acción fundamentalmente racional y política; es decir, la apreciamos como un instrumento utilizado por un actor en un momento determinado para interpelar a la autoridad y con ello alcanzar ciertos fines colectivos: la consideramos la *política de la calle* (v. López Maya, 2000). Igualmente, utilizamos los aportes teóricos proporcionados por especialistas de la movilización de otras latitudes y tiempos históricos, que argumentan a favor de una causalidad compleja de las protestas, donde la organización, el liderazgo y lo que han llamado la “estructura de oportunidades políticas”. Es decir, la aparición de una combinación de factores de naturaleza político-institucional externos a los actores impulsan la acción colectiva (v. Tarrow, 1996:18-19, 84ss.). Consideramos, al igual que estos autores, que si bien las condiciones socioeconómicas son el caldo donde se cultiva el malestar y/o los sentimientos de indignación moral e injusticia, serán, en definitiva, causas de índole sociopolítica, las que impulsarán la movilización, la sostendrán en el tiempo y moldearán sus características.

En cuanto a la información empírica trabajada, ésta proviene principalmente de la base de datos El Bravo Pueblo (BDEBP) y de los informes anuales de la situación de los derechos humanos en Venezuela publicados por Provea (Progra-

ma Educación-Acción en Derechos Humanos). La primera es una base de datos digitalizada en construcción, que recoge las reseñas que sobre eventos de protesta ha publicado el diario *El Nacional* desde su fundación.<sup>1</sup> Los años del primer Gobierno de Caldera no están completos, existe información día a día de 1970 y 1973, y algunos meses de 1972. Hemos seleccionado los años 1970 y 1973 como ejes de nuestro análisis, considerando que dos años nos acercan de manera bastante fidedigna al clima y otros aspectos de la movilización de la época. Para los años de Chávez, esta base de datos sólo tiene completo el año 1999, sin embargo, en este caso los informes de Provea cubren todos los años. En esos informes se brinda una información bastante copiosa, tanto en términos numéricos como de las características de la protesta.

## PROTESTAS DEL PRIMER GOBIERNO DE RAFAEL CALDERA

La información sobre protestas de los años 1970 y 1973 revela que se desarrolla por estos años en la *política de la calle* una intensa confrontación de ciertos sectores sociales con autoridades y patronos. La base de datos El Bravo Pueblo recoge un total de 353 reseñas sobre eventos de protesta en el año 1970 y 840 reseñas en 1973. A continuación destaquemos los rasgos principales de las protestas que estas reseñas describen.

### La naturaleza de las protestas

En el año 1970, el 75 por ciento de protestas fueron de naturaleza confrontacional, es decir, fueron acciones colectivas pacíficas, pero que generaban una atmósfera de tensión o sorpresa, y sentimientos de amenaza por parte de la autoridad y de quienes no participaban de ellas.<sup>2</sup> A este tipo de protesta le siguió, en número de reseñas, las protestas de naturaleza violenta, que son aquellas que resultan en daños a la propiedad privada y las personas, que representaron el 17,8 por ciento del total. De éstas, el 13,3 por ciento correspondieron a disturbios estudiantiles, tanto de liceístas como de estudiantes universitarios. Las protestas convencionales reseñadas que correspondieron a movilizaciones legales que poco alteraban la vida cotidiana o el estado de ánimo de observadores y patronos, no pasaron del 5,94 por ciento del total. Estos datos sobre la naturaleza de la protesta nos señalan un panorama sociopolítico tenso y turbulento ese año.

<sup>1</sup> La base de datos El Bravo Pueblo (BDEBP) ha contado para su construcción con financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV (Proyecto N° 26.50.4047.97).

<sup>2</sup> La clasificación en protestas confrontacionales, violentas y convencionales, según fuere su naturaleza, fue elaborada por Tarrow (1996:97-99).

En el año 1973, un año de coyuntura electoral, la protesta callejera aumentó significativamente. La base de datos recoge 840 reseñas, en contraste con las 353 de 1970. Llama la atención, sin embargo, que se ha producido un cambio en la naturaleza de la protesta, pues este año las acciones convencionales superan a las confrontacionales y las violentas: las primeras representan el 51,19 por ciento de las reseñas, las segundas el 32,26 por ciento, lo que pareciera reflejar una disminución de la tensión política y una canalización de la conflictividad a través de las acciones colectivas convencionales propias del proceso electoral. Por otra parte, el porcentaje de protestas violentas alcanza 16,66 por ciento, lo que representa sólo una ligera disminución en relación con el año 1970, lo cual indica la permanencia de una manera extrainstitucional de hacer política en la calle.

### Las formas de la protesta

Muchas de las protestas confrontacionales de 1970 se dieron dentro de la modalidad de los paros y huelgas, la mayoría desarrollados por trabajadores pertenecientes al sector de los servicios básicos, pero también hubo significativas interrupciones laborales en sectores mineros y petroleros. Casi la mitad de la totalidad de reseñas registradas ese año, el 47,8 por ciento, informan sobre paros o huelgas, una acción colectiva que suele provocar bastante tensión política. Están, por ejemplo, los casos de los paros en el mes de enero en el estado Zulia, de transportistas, personal de servicios médicos y trabajadores petroleros. A finales de abril y principios de mayo también se vivieron días de intensa confrontación en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por los paros de cientos de trabajadores de la Orinoco Mining Company, de la Lannus y de Alcasa. Los paros de estos trabajadores fueron declarados ilegales por el Ministerio del Trabajo, lo que revela no sólo el alto componente conflictivo que implicaban, sino también la represión de que serían objeto.

Entre las protestas violentas de 1970, además de los numerosos disturbios estudiantiles, también hubo acciones de otro tipo protagonizadas por actores del campo. Éste es un ejemplo recogido por la BDEBP, realizado por un grupo de campesinos del estado Lara:

En un caserío del distrito Torres [estado Lara], campesinos armados con machetes impidieron las salidas de unas maquinarias por considerar, según señaló el presidente del ayuntamiento, Morillo Gómez, que cuando tales implementos sean trasladados, será difícil que regresen y las obras quedarían inconclusas. Los campesinos acusan al Dr. Andrés Charles del MAC, de haber escondido alcantarillas valoradas en Bs. 100.000,00, las cuales habrían sido destinadas a dicha construcción. El Secretario General de Gobierno del Estado Lara, el Dr. Elías Gerardo Saldicia Yáñez, dijo que lo ocurrido

es producto de la actuación personal del presidente del Concejo y en ningún caso al comportamiento del partido Copei. Algunos campesinos fueron dejados en el lugar vigilando [las maquinarias] con escopetas y machetes (BDEBP, mayo de 1970).

Otras formas de acción, como el cierre de vía o la concentración, fueron escasas, no sobrepasan el 1 por ciento del total de reseñas registradas. La toma de establecimientos, por el contrario, es más visible, 32 reseñas en total, lo que representa 10 por ciento. La toma como forma de protesta fue ejercida mayoritariamente por actores estudiantiles, aunque algunas tomas ejercidas por vecinos, trabajadores y campesinos también fueron reseñadas ese año.

En 1973 siguen siendo las huelgas y paros la forma más reseñada, con un total de 347 reseñas registradas (41,3 por ciento del total de reseñas). Una huelga de intensa confrontación, con acciones colectivas violentas simultáneas, creó una atmósfera tensa en la ciudad de Maracaibo el día 19 de febrero. Así lo registra la base de datos:

Una huelga de millares de maestros dependientes del Ejecutivo Regional, un paro de choferes de autos por puestos y disturbios estudiantiles, paralizaron hoy a la ciudad de Maracaibo; además de ello, las oficinas del Instituto Agrario Nacional, fueron ocupadas por más de sesenta campesinos que vinieron del Distrito Colón, reclamando tierras que les habían ofrecido hace algunos años. La huelga de los educadores comenzó a las 7 de la mañana y tiene carácter indefinido. Los maestros protestan porque la Secretaría de Educación del Ejecutivo Regional, viola el acta-convenio firmada el año pasado con la Federación Venezolana de Maestros, en lo referente a la Ley de Escalafón y Ascensos [...] Los choferes de las rutas urbanas de autos por puestos de toda la ciudad, realizaron un paro general indefinido, a partir de las doce del día [...] por presuntas violaciones de un convenio firmado con las autoridades gubernamentales, sobre la instalación de paradas de carros de alquiler y de autobuses, que se estacionan en la redoma de Puente España. [...] Mientras esto ocurría, grupos de estudiantes quemaron algunos cauchos y destruyeron vidrieras de un comercio, sustrayendo la mercancía. La policía intervino con bombas lacrimógenas, disolviendo la manifestación y practicando varias detenciones (BDEBP, febrero, 1973).

Otra modalidad de protesta muy usada ese año fue el comunicado impreso en los diarios, que visibilizaba quejas a las autoridades sobre las más diversas materias: contaminación, represión, libertad de expresión, falta de medicamentos, mal estado de servicios y así. Es una modalidad convencional que no genera mayores angustias, pero su prolijidad no deja de ser significativa. Los comunicados representaron el 16,3 por ciento del total de reseñas ese año. Los disturbios estudiantiles

continuaban su visibilidad, 115 fueron las reseñas que las aludían (13,6 por ciento del total). Las reseñas sobre tomas fueron 70 (8,3 por ciento), las de concentraciones son 36 (4,25 por ciento) y, al igual que en años anteriores, las marchas y los cierres de vías son insignificantes.

### Los actores de la protesta

Los actores que hacen política en la calle en 1970 procedían principalmente del sector educativo: eran estudiantes, tanto de educación media como universitaria. Este año en particular los liceístas sobrepasan a los universitarios como actores reseñados, pues aparecen en el 16,6 por ciento de las protestas reseñadas; los universitarios en el 13,2 por ciento. La baja del protagonismo de los universitarios se debe a que la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de numerosos enfrentamientos entre sus autoridades y el Gobierno de Caldera, fue allanada y cerrada en octubre. Otros actores muy visibles por aquel año fueron los maestros, los obreros, empleados públicos y vecinos. Como nota interesante se registran dos protestas por parte de grupos de periodistas, una por malos tratos por parte del personal del Ministerio de Educación, y otra para presionar por la Ley de Colegiación. En la información disponible en la BDEBP, el periodista aparece como un actor beligerante en varios años de este período presidencial, señalando la conflictiva relación del Gobierno de Caldera con ese sector.

La relación de confrontación y violencia entre el Gobierno de Caldera y el sector de la educación pública media y universitaria no cedió a lo largo de los años de ese gobierno. Para el primer cuatrimestre de 1972, la ciudad de Caracas parecía un polvorín por la movilización sin solución de continuidad de liceístas y universitarios. Estas movilizaciones eran acompañadas o complementadas en ciertos momentos por asaltos guerrilleros, que le daban un carácter profundamente violento a la atmósfera del día a día. Sirva como ejemplo el mes de enero de 1972, cuando a las puertas de unas elecciones estudiantiles en la UCV, elecciones que muchas organizaciones de izquierda rechazaron por considerar que la manera como se decidieron entrañaba una severa lesión a la autonomía universitaria, una mirada a las reseñas de *El Nacional* nos señala los siguientes episodios de protesta, la mayoría de ellos violentos: a) el 4 de enero, asalto guerrillero al cuartel de las Fuerzas Armadas en Ocumare del Tuy, mientras en Caracas se desarrollaba un paro escalonado en los hospitales municipales por parte de los trabajadores; 2) asalto y robo a la Escuela de Comunicación Social el día 12; c) asalto guerrillero a la medicatura de la Colonia Tovar, estado Aragua el día 19; en Puerto Ordaz ese mismo día es disuelta violentamente una manifestación estudiantil y se llevan 17 detenidos: hubo quema de neumáticos, mítines relámpagos y quema de una camioneta de la compañía petrolera Creole; también ese día hubo disturbios en la Escuela Técnica Indus-

trial (ETI) de Caracas con saldo de 10 estudiantes y 5 policías heridos; d) los disturbios comenzados el día 19 se prolongan los dos días siguientes cuando, además de la ETI, 7 liceos de Caracas se suman a las protestas; e) el 24 del mismo mes estalla una huelga de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad de Carabobo, f) el 25 el Ministerio de Educación acuerda suspender clases en la capital por la ola de violencia. En febrero y marzo las protestas estudiantiles siguen dentro del mismo patrón, son protestas violentas que tienen como respuesta gubernamental una fuerte represión, que implica detención de estudiantes, ocupación de universidades y liceos en distintas ciudades del país por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, decenas de heridos y pérdidas de vidas humanas. El 13 de abril más de 500 motos se unieron a una manifestación de estudiantes en Caracas que primero se concentró en la plaza La Concordia y luego marchó a pie hasta el Panteón Nacional, donde se desarrolló otra concentración para protestar 3 muertes violentas ocurridas en los días pasados, así como la detención de estudiantes. Esa protesta ocasionó más de 100.000 bolívares en daños a la propiedad. Al día siguiente moría un estudiante en una manifestación en la plaza Las Tres Gracias de los Chaguaramos, con lo cual seguía la espiral de violencia.

En 1973 el sector educativo supera con mucho los otros protagonistas en la calle. Entre los liceístas y los estudiantes universitarios se alcanza el 29,8 por ciento del total de reseñas (251 protestas); si a éstos se les suman las acciones de profesores y empleados se llega a las 319 reseñas, o sea, 37,9 por ciento del total. Los obreros y empleados son, después del sector educativo, quienes más se movilizan; 195 reseñas se refieren a diferentes acciones de ellos motivadas por el incumplimiento de los compromisos laborales del Gobierno, despidos y otros problemas por parte de patronos privados (19,6 por ciento). Los trabajadores del sector público y privado urbano son seguidos este año por actores ubicados en el campo y la agroindustria: campesinos, pequeños productores, ganaderos y trabajadores de la industria azucarera se movilizaron por toda una cadena de quejas conectadas con la desatención del campo y la incoherencia en la política del sector. Otro actor muy movilizado fueron los periodistas, un total de 29 reseñas (3,4 por ciento) expresan una intensa protesta –y extensa, pues se dio en muchas ciudades del país– originada por la detención del periodista José Ratto-Ciarlo, considerada por el gremio como un hecho más dentro de la grave escalada de sucesos atentatorios de la libertad de expresión que se estuvieron desarrollando durante el Gobierno de Caldera.

En resumen, encontramos en esta mirada a la política de la calle del primer Gobierno de Caldera una intensa y sostenida movilización, con un alto contenido confrontacional y violento, y un gran predominio del movimiento estudiantil como protagonista. En 1973 la protesta baja su contenido confrontacional, aunque sigue

alto el porcentaje de protestas violentas. Acompaña esta protesta callejera acciones de asalto de las guerrillas a edificios e instituciones del Estado, que enrarecen y hacen más tensa la atmósfera. Observamos también a un gobierno y unos cuerpos de seguridad poco tolerantes del derecho a la protesta y la libertad de información, que usan mucha violencia para reprimir a los actores.

## **LAS PROTESTAS DEL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ**

Para el año de 1999, primer año de Gobierno de Chávez, disponemos de información proveniente, tanto de la BDEBP, como del informe anual de Provea que periodiza entre octubre de 1998 y septiembre de 1999. La combinación de ambas fuentes nos permite tener una idea más acertada sobre el número total de protestas que en el análisis que hicimos del período de Caldera, puesto que las reseñas de BDEBP corresponden solamente a la fuente de *El Nacional*, mientras que Provea registra de varios periódicos nacionales y regionales.

Para el año 1999 la BDEBP registró un total de 355 reseñas en *El Nacional*, lo que fue un aumento de más de 100 por ciento en reseñas de protesta en relación con el año previo de 1998, que fue de coyuntura electoral. Esto es consistente con el informe de Provea que afirma que en el período que va de septiembre 1998 a octubre de 1999 saltaron las protestas en el orden de 102,6 por ciento (855) en relación con el período previo (1999:321).

En el informe de Provea correspondiente al período octubre de 2001 a septiembre de 2002, el total de reseñas sobre protestas alcanza 1.262, una cifra ligeramente inferior a 1.312 del período previo, a su vez menor a 1.414 registradas en el período 1999-2000; pero es superior a 855 del período 1998-1999 señalado arriba (v. Provea, años respectivos). Estas cifras revelan que los años de Gobierno de Chávez, al igual que los del primer Gobierno de Caldera, se caracterizan por una intensa movilización callejera. El período pico parece haber sido entre octubre de 1999 y septiembre de 2000, a partir del cual el número de protestas tiende a la baja. Veamos a continuación las otras características de las protestas.

### **La naturaleza de las protestas**

En 1999, según la BDEBP, las reseñas sobre protestas confrontacionales fueron predominantes, alcanzando la cifra de 240 (67,6 por ciento); fueron seguidas por protestas violentas que alcanzaron las 72 reseñas, es decir, 20,28 por ciento del total de reseñas y las convencionales que fueron reseñadas en 43 casos (12,11 por



ciento). Estos datos, al igual que los revisados durante los años del primer Gobierno de Caldera, evidencian un clima de tensión y turbulencia sociopolítica bastante significativo.

Para el período octubre de 2001 a septiembre de 2002 el informe anual de Provea, que es la información que tenemos disponible, no recoge la estadística sobre la naturaleza confrontacional o convencional de las acciones colectivas. No obstante, sí se señala allí que “de las tres formas de acción de protesta más utilizadas, el cierre de calle, la toma de establecimiento y la concentración, las dos primeras de ellas son claramente confrontacionales y disruptivas de la vida cotidiana” (2002:499). Ello pareciera indicar que la protesta confrontacional sigue siendo la dominante. Así mismo, registra 121 protestas violentas, que corresponden al 10,6 por ciento del total de protestas. Esta cifra es interesante porque, por una parte, revela una notable disminución de la protesta violenta en relación con 1999; por otra parte, es también menor a la registrada en los dos años analizados correspondiente al primer Gobierno de Caldera. Los informes de Provea también señalan una disminución de la represión a las manifestaciones pacíficas en los tres primeros años del Gobierno de Chávez.<sup>3</sup>

### Formas de la protesta

Al igual que en los años de Caldera, los paros y huelgas son las protestas más reseñadas en 1999. En este año fue especialmente conflictivo el sector de obreros y trabajadores petroleros, que llamaron en varias ocasiones al paro por la discusión del contrato colectivo. El sector de los desempleados petroleros fue de los más movilizadas este año, siendo algunas de sus protestas de carácter violento. En total, las reseñas sobre paros y huelgas alcanzaron 27,3 por ciento, lo cual es bastante menos de la cobertura que recibió esta forma de acción en los años de Caldera que revisamos, cuando entre el 40 y el 48 por ciento de las reseñas eran de paros. La segunda modalidad más reseñada en 1999, según BDEBP, fueron los disturbios (12,95 por ciento del total), en su mayoría estudiantiles; en tercer lugar, los cierres de vías (11,26 por ciento), lo cual es significativamente distinto al período de Caldera, cuando esta forma de acción era poco relevante en el repertorio de la protesta. En el informe 1998-1999 de Provea se estima el cierre de calle como la más frecuente forma de acción callejera ese año, una forma, que afirman, ha desplazado otras como concentraciones y marchas de sus primeros lugares en el repertorio de la protesta venezolana (1999:322). La BDEBP registra en orden de mayor a

<sup>3</sup> Véase los informes previos de Provea (2000 y 2001). Para un análisis de la evolución del derecho a la manifestación pacífica en la última década, véase López Maya (2003).

menor número de reseñas, las siguientes formas de protesta: concentraciones, huelgas de hambre, marchas, tomas de establecimientos y paros cívicos. Se observan como novedades los cacerolazos, que empezaron a hacerse visibles en Venezuela durante los años de crisis política del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (a partir de 1992), asociándose con motivos de repudio político, las autoflagelaciones y autosecuestros, vigiliias y caravanas. Las huelgas de hambre y las autoflagelaciones son principalmente protagonizadas por los reclusos, sus familiares y allegados, en búsqueda desesperada de llamar la atención a las autoridades sobre los graves problemas que confronta el régimen carcelario venezolano. Esta información es de una de las reseñas:

550 reclusos de El Dorado, decretaron la “huelga de sangre” como medida de protesta por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Piden ser trasladados a sus cárceles de origen. La “huelga de sangre” consiste en la autoagresión hasta causarse heridas graves y la muerte. Los reclusos enviaron a los medios de comunicación, un documento respaldado por diversas agrupaciones de derechos humanos, algunos párrocos y vecinos de la población El Dorado, explicando las razones de esta drástica medida (BDEBP, octubre, 1999).

En el período 2001-2002, según Provea, la forma predominante de la protesta es una vez más el cierre de calles, que alcanza la cifra de 332, el 26,3 por ciento del total. Le siguen 252 concentraciones, el 20 por ciento del total de protestas y 161 tomas de establecimientos, 12,8 por ciento. Estas tres modalidades constituyen casi las 2/3 partes de los eventos de protesta. Las huelgas y paros contabilizados por Provea alcanzaron la cifra de 132, lo que las colocaría como la cuarta modalidad más frecuente de protesta, representando el 10,5 por ciento del total. Esto es una disminución notable respecto a los años del primer período de Caldera, cuando ocupaba el primer lugar (2002:499). En este período la huelga más disruptiva fue la convocada por la nómina mayor de Pdvsa hacia el 20 de marzo, que fue el motivador de un paro nacional indefinido llamado por la CTV con apoyo de Fedecámaras, partidos de oposición y la Iglesia católica el 9 de abril. El desenlace de ese paro, conjuntamente con una marcha insurreccional, que desvió su recorrido para dirigirse al Palacio Presidencial con el objetivo de “sacar a Chávez” de su cargo, sería el golpe de Estado y los trágicos sucesos que los rodearon (v. López Maya, 2002b).

Además de estas formas de acción, que son con mucho las mayoritarias y que dejan ver el clima confrontacional que caracteriza el año, se practicaron en menor grado marchas, 122 eventos (9,7 por ciento). Por otra parte, siguen las formas novedosas que habíamos señalado para el año 1999, entre otras: los cacerolazos, de los cuales fueron registrados 13, representando el 1 por ciento de la totalidad de acciones; 11 vigiliias, 0,9 por ciento. También adquiere una visibilidad importante

el paro cívico, que no es una novedad, pero que por la dificultad para su realización y lo extremo de su acción suele ser raro. En este período, sin embargo, hubo 6 (0,5 por ciento del total) convocados, como es usual, por empresarios, comerciantes y autoridades locales o regionales. El paro cívico más impactante fue el convocado por Fedecámaras y la CTV el 10 de diciembre de 2001, el cual fue un punto de inflexión en la organización de las fuerzas opositoras al Gobierno (López Maya, 2002a). Provea registra otras formas de acción, como el encadenamiento, la amenaza de autoincinerarse, la autoflagelación, el velorio simbólico de autoridades públicas, la quema de muñecos representativos de personajes confrontados, etc., que sumaron en conjunto alrededor de 47 acciones, el 3,7 por ciento (Provea, 2002). En resumen, esfuerzos de creatividad y una alta conflictividad sociopolítica.

### Los actores de la protesta

Una diferencia muy notable con la información que revisamos del primer Gobierno de Caldera, es que el espectro de actores haciendo uso de la movilización callejera se ha diversificado mucho. Según BDEBP, los actores más visibles en el año 1999 fueron los choferes del transporte (9,85 por ciento del total de reseñas), conjuntamente con los estudiantes universitarios y liceístas (9,57 por ciento del total), los obreros y trabajadores petroleros y los vecinos (8,45 por ciento del total cada uno). Sin embargo, los porcentajes de las reseñas sobre estos actores en relación con el total –ninguno alcanza a aparecer en el 10 por ciento de las reseñas– revelan que comparten ahora la calle con muchos otros actores: partidos políticos (8,16 por ciento), presos (7,60 por ciento), empleados públicos (5,35), médicos (4,78 por ciento), desempleados (3,94 por ciento), buhoneros (2,53 por ciento), indígenas (1,97 por ciento), encapuchados (1,12 por ciento) por nombrar sólo algunos de los reseñados.

En el período 2001-2002, al igual que en los informes de Provea de períodos previos,<sup>4</sup> son los estudiantes los de mayor movilización. Participaron en este período en 221 protestas, lo que representa casi un quinto (17,5 por ciento) del total. Si sumamos a ellas las realizadas por los maestros y profesores, 89, y los padres y representantes, 26, obtenemos a los actores del sector educativo protagonizando un total de 336 acciones, es decir, el 26,6 por ciento del total. También se concentró en actores de este sector el mayor número de protestas de carácter violento. De las 120 protestas violentas registradas, los estudiantes de educación media y técnica fueron los promotores de 39 de ellas, lo que significa el 32,5 por ciento; los estudiantes universitarios participaron en 27, el 22,5 por ciento. Esto nos indica que los estudiantes de educación media, técnica o superior se vieron involucrados en el 55 por

<sup>4</sup> Aquí se hace un resumen del informe anual de Provea que se viene utilizando.

ciento de las acciones de protesta violentas. Pese a ser este número bastante abultado, está indicando una tendencia a la disminución de protestas violentas protagonizadas por los estudiantes. En el informe previo de Provea los estudiantes habían sido actores del 87 por ciento de éstas (2001:408).

A los estudiantes le siguieron los vecinos como actor más activo en las acciones de protesta con 156 protestas, el 12,36 por ciento del total. Los trabajadores asalariados, categoría que incorpora a los trabajadores del sector formal privado o público, exceptuando a los educadores, empleados públicos, profesionales de la salud y trabajadores y empleados petroleros, participaron en 134 acciones de protesta, lo cual representa el 10,6 por ciento de todas las registradas. Los trabajadores de la salud participaron en 124, representando el 9,83 por ciento del total. Otro actor bastante activo fue el de los desempleados, que participaron en 63 protestas, el 5 por ciento del total. El conjunto de los actores hasta ahora mencionados escenificaron el 55,3 por ciento de las manifestaciones reseñadas.

Otros actores de cierta relevancia cuantitativa fueron los grupos movilizados a favor o en oposición del Gobierno, protagonizando los primeros 96 acciones y los segundos 88, lo que representa el 7,6 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente. Si bien las movilizaciones en apoyo u oposición al Gobierno se caracterizaron por su gran visibilidad, tanto por el número de sus participantes como por la cobertura que los medios de comunicación le dedicaron, sólo alcanzaron entre ambas el 15 por ciento, lo que es menor al activismo estudiantil. Es de destacar, como novedad, que las movilizaciones de la oposición contaron con sectores de ingresos medios y altos de la población, un fenómeno bastante nuevo en la política de la calle, que suele estar reservada a los sectores populares y estudiantiles que históricamente han carecido de canales eficientes de mediación y representación en el sistema político. Otros actores relevantes fueron los transportistas y choferes, con el 3,1 por ciento, los jubilados, pensionados y ancianos con 2,4 por ciento, los reclusos y detenidos con el 2,2 por ciento, los buhoneros 1,6 por ciento, los empleados públicos 1,4 por ciento, los trabajadores petroleros 1,3 por ciento, los empleados petroleros 0,7 por ciento, los damnificados 0,6 por ciento y los policías 0,6 por ciento. Al igual que lo registrado en 1999, se mantiene aun amplia la diversidad de actores que hacen vida política en la calle.

## **FACTORES QUE IMPULSABAN LA MOVILIZACIÓN DURANTE EL PRIMER GOBIERNO DE CALDERA**

Según la historiografía contemporánea venezolana más conocida, el Gobierno de Caldera tuvo importantes logros en el proceso de estabilización e institucio-

nalización de la democracia nacida en 1958 (v. Caballero, 1998; Urbaneja, 1997). Se destacan desde esta óptica: a) la política de pacificación desarrollada por ese Gobierno para con aquellos sectores de la lucha armada que estaban en disposición de regresar a la legalidad; b) el hábil manejo de las relaciones civiles-militares, que neutralizó algunos brotes de insubordinación y politización de este sector del Estado; c) el impulso a procesos y leyes que hicieron adelantos en el campo del desarrollo institucional del Estado, como lo fue el proceso de regionalización de la planificación o la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa y d) la construcción de alianzas con el partido AD, de naturaleza inicialmente informal y temporal, pero que se consolidarán en los años siguientes, conociéndoseles como el “Pacto Institucional”. La mayoría de estos aspectos de la gestión de Caldera ponen de relieve un progreso creciente de consolidación de los acuerdos entre actores hegemónicos que se establecieron desde 1958. Revelan, que pese a las debilidades políticas con las cuales asumió la presidencia Caldera y su partido Copei –originadas en el escaso margen de su victoria electoral y al hecho de no contar con mayoría en el Congreso– el Gobierno pudo conjurar y neutralizar actores de poder potencialmente capaces de desencadenar una crisis política.

Desde la perspectiva conceptual que venimos utilizando, los aspectos arriba señalados revelan más bien rasgos del período que favorecerían una baja de la política de la calle. Se hace necesario, entonces, volver sobre este período, tanto en lo relativo a las condiciones socioeconómicas prevalecientes como con respecto a otros aspectos político-institucionales que, a diferencia de los arriba señalados, estaban favoreciendo la continuación y aun exacerbando en algunos casos la movilización popular que se había desarrollado en los años previos.

En lo relativo a condiciones económicas del período del primer Gobierno de Caldera, la sociedad venezolana comenzaba a experimentar por estos años los primeros desajustes importantes en lo que era un modelo de desarrollo por sustitución de importaciones bastante exitoso comparado con otras economías latinoamericanas.<sup>5</sup> La tasa interanual de crecimiento económico del PIB tendía a decrecer: entre 1960 y 1962 fue de 10,2 por ciento; entre 1962 y 1965 de 4,7 por ciento y continuaba bajando. A finales de la década, poco antes de comenzar el Gobierno de Caldera, comenzaron a revelarse los límites de este modelo. La industria no parecía capaz de crecer sin la permanente ayuda del Estado, entre otros motivos, porque los gastos de las empresas tenían un efecto limitado sobre la actividad económica interna, ya que una parte de éstos se trasladaban al exterior en forma de

<sup>5</sup> Existen varios estudios exhaustivos realizados por economistas sobre la evolución y los problemas del modelo industrializador venezolano. Aquí seguimos una síntesis que una vez hicimos en López Maya *et al.* (1989). Sólo se citan nuevas referencias.

compras de insumos y pago de patentes. El patrón de consumo y producción, calcado de países industrializados, implicó una orientación del aparato productivo hacia grupos minoritarios de altos ingresos, con lo cual el mercado interno no lograba expandirse para producir una economía armónica. La capacidad para importar tecnología de punta, ahorradora de mano de obra, produjo también altos niveles de capacidad ociosa y escasa capacidad de crear puestos de empleo.

El proceso industrializador, por consiguiente, en vez de producir un crecimiento autosostenido como fue la promesa de la democracia nacida del Pacto de Punto Fijo, necesitaba apoyos crecientes de los recursos estatales; en vez de absorber magnitudes crecientes de la población económicamente activa, era un modelo excluyente, que empujaba hacia un crecimiento insano del empleo en el sector público como manera de neutralizar la conflictividad social. La pérdida de dinamismo del proceso industrializador llevó al Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969) a formular salidas a la estrechez del mercado interno (Aponte, 1984). Primero las intentó por la vía de ampliar el mercado externo, promoviendo el ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) en 1966. Esta iniciativa no prosperó, por lo que durante el Gobierno del presidente Caldera se impulsó del ingreso venezolano al mercado subregional llamado Pacto Andino. Pero el Pacto Andino sólo pudo ser firmado en 1973, por las numerosas resistencias del empresariado venezolano de entrar a un mercado común con sus homólogos andinos (*id.*), de manera que no jugó papel alguno para corregir la disfunción económica.

Esta pérdida de dinamismo en el modelo de sustitución de importaciones creó condiciones propicias para la generación de malestar entre ciertos sectores sociales afectados por el escaso empleo, los salarios bajos y la poca capacidad de consumo. Pueden, por tanto, haber contribuido a los conflictos laborales de importante magnitud que se desarrollaron, tanto en el sector público como en el sector privado de este período. Tal es el caso de los paros en las industrias mineras y básicas de Guayana que señalamos arriba, donde el Estado venezolano se mostró poco dispuesto a jugar un rol paternalista, como lo hizo en otros sectores industriales. Algunas políticas del Gobierno buscaron neutralizar el malestar laboral y tuvieron su éxito. Por ejemplo, durante los años de Caldera, el gasto social del Estado venezolano alcanzó un promedio de 38 por ciento del total del gasto fiscal, superando los demás rubros del gasto estatal. También se dio en estos años una continua ampliación del empleo en el sector público para absorber la creciente mano de obra que no encontraba ubicación en la actividad industrial. También el Gobierno de Caldera utilizó la represión, como sucedió con las huelgas mineras en 1970 y la de Sidor en 1971, que el Ministerio del Trabajo consideró ilegales y que castigó con despidos masivos.

Sin embargo, huelgas obreras como las de Guayana no se derivan exclusivamente del malestar ante situaciones de explotación de la mano de obra. Intervienen de manera decisiva otros factores políticos endógenos, como la organización y el liderazgo de los movimientos obreros y populares, y condiciones externas a los movimientos que son percibidas como ventajosas para la acción colectiva por los dirigentes. En el caso de la huelga en Sidor, por ejemplo, además de las duras condiciones a las cuales estaban sometidos los trabajadores en la Siderurgia, existía en la zona una importante efervescencia organizativa entre los obreros y un liderazgo vigoroso principalmente de izquierda que competía por el favor de la masa laboral y que desarrollaba sus actividades en el seno del sindicato Atiss (Asociación de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares).

En el conflicto laboral que daría como resultado la huelga indefinida de mediados de 1971 en Sidor, se unieron los líderes de todas las corrientes ideológicas, incluidas todas las tendencias de izquierda representadas en los partidos MEP, PCV y el MAS. Este último, fundado a inicios de ese año –originándose de una división del PCV– había obtenido una importante votación en las elecciones de Atiss en las semanas previas a la huelga. Entusiasmados por la aceptación lograda entre los trabajadores siderúrgicos, los dirigentes masistas no sólo apoyaron la huelga, sino que cuando la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) retiró su apoyo al mismo, y los dirigentes del MEP y otros moderados vacilaron, ellos se radicalizaron y sostuvieron la huelga hasta un final de derrota (Ellner, 1988:150-152). El MAS padeció por ello el despido de la empresa de alrededor de 300 de sus dirigentes de un total de 514 despidos que se produjeron como resultado del fracaso de la huelga. Fue esto un duro golpe al sindicalismo no afecto a los partidos hegemónicos, que se debilitó en la zona en los meses siguientes y que puede explicar la baja de la lucha confrontacional de estos sectores en los años siguientes.

Por otro lado, la mecha que encendía la movilización del movimiento estudiantil venezolano seguía sólidamente prendida y en estos años de Caldera incluso se potenció. Pero, ya no estaba promovida principalmente por el peso que ejercía en este movimiento las organizaciones y sectores excluidos de los pactos hegemónicos de 1958 en adelante, que habían optado por la lucha armada –los partidos PCV y MIR– sino que, más bien, venía recibiendo un nuevo impulso de un proceso sociopolítico más reciente que se relacionaba indirectamente con esa lucha armada y la trascendía: el proceso de “renovación académica” (*Ibid.*:49-53).

El proceso llamado de renovación académica fue, tanto un resultado del cuestionamiento a procesos políticos internos vividos por los venezolanos en la década

previa como el fruto de la influencia de movilizaciones e ideas estudiantiles europeas, en particular francesas. La derrota de la lucha armada, las críticas a la verticalidad y autoritarismo de los partidos que la llevaron a cabo, se solapaba en las universidades con la crítica demoledora que hacían los estudiantes a las bases mismas del conocimiento que se les impartía. Los jóvenes criticaban la escasa originalidad de lo que se enseñaba, la rigidez de los métodos de sus profesores, la burocratización, el autoritarismo y las jerarquías de las instituciones educativas. El movimiento de renovación académica llamó al estudiantado a una participación masiva a través de asambleas y otras actividades fuera del aula y en la calle para renovar sus instituciones. Sus exigencias más importantes fueron la paridad en los consejos de Gobierno del sector, el rediseño de los *pensa* y programas de estudio, y un cuestionamiento permanente a todo lo aprendido (*Ibid.*:51-52).

Los actores hegemónicos venezolanos –representados en el pacto de Punto Fijo y otros acuerdos entre empresarios, obreros, Iglesia católica y militares– vieron al proceso de renovación universitaria como una amenaza al orden político construido desde 1958, y como una prolongación de las luchas del decenio anterior libradas por la guerrilla. En este sentido, el Gobierno del presidente Caldera, con el apoyo de esas fuerzas y factores de poder, ejerció una represión muy severa contra la movilización estudiantil y contra las ideas que emergían de la renovación académica, entendiéndola como parte de una lucha entre modelos antagónicos de sociedad. La nueva Ley de Universidades fue aprobada en 1970, y la oposición a la misma por parte de las autoridades de la UCV culminaría con el allanamiento y la destitución de sus autoridades en octubre de ese año. La reapertura de la máxima casa de estudios hacia 1972 implicó la convocatoria a elecciones estudiantiles y de autoridades de acuerdo con la nueva ley, lo que volvió a enardecer la movilización. El traumático proceso produjo por años una situación de alta beligerancia de las diversas organizaciones representativas del sector educativo público, la extensión del conflicto a todos los liceos y universidades importantes del país en solidaridad con la UCV, y la utilización de un repertorio de protesta altamente confrontacional y violento en su naturaleza. La violencia de la represión estatal dejó un saldo significativo de estudiantes muertos que realimentaban la espiral de violencia de las protestas.

A estos factores pueden sumarse otros propios de la estructura de oportunidades políticas: la generalizada percepción por parte de la sociedad de la debilidad política del Gobierno, dado el escaso margen con que ganó y su debilidad en el Congreso, y la existencia de fracturas en las élites por la división de AD antes de la coyuntura electoral de 1968. Así mismo, la continuación de algunos focos guerrilleros y la incorporación, gracias a la pacificación, a los espacios legales de acción política de actores sociopolíticos entrenados hasta entonces en estrategias de



confrontación y violencia, junto con la represión ejercida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mantenían prendido el fuego de la “indignación moral” –como la llama Barrington Moore, jr.– en diversos sectores sociales y políticos que propiciaban la continuación de la protesta.

### **FACTORES QUE IMPULSAN LA MOVILIZACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ**

Desde muchos años antes del Gobierno del presidente Chávez, la sociedad venezolana reúne con creces las condiciones socioeconómicas que hacen propicia la acción colectiva. Al menos por dos décadas, el modelo de sustitución de importaciones dejó de orientar provechosamente la actividad económica del país, siendo sustituido por políticas gubernamentales erráticas e incapaces de retomar la senda del crecimiento económico, produciendo creciente pobreza y empobrecimiento de sectores sociales medios. Adicionalmente, desde finales de los ochenta se han ensayado políticas de ajuste y reestructuración neoliberal ortodoxos que no han revertido esta situación; por el contrario, han acentuado el empobrecimiento y la desigual distribución del ingreso (López Maya y Lander, 2001:231-254). Como lo señalara Del Búfalo (2002), la reestructuración neoliberal aplicada ya por más de dos décadas en América Latina, y en particular los diversos ensayos aplicados en Venezuela, no han tenido la capacidad para resolver los dos problemas históricos de la región que son la pobreza y la exclusión social (p. 180). La gestión del presidente Chávez, aunque en términos retóricos y constitucionales refleja una búsqueda por cambiar la orientación económica neoliberal de gobiernos previos, no ha logrado cambios sustantivos en las tendencias económicas. Los datos macroeconómicos y sociales disponibles indican la continuación de las tendencias erráticas y la aplicación de políticas de ajuste que venían predominando previamente, manteniéndose un contexto socioeconómico propicio para la protesta.

En el ámbito político-institucional también se destacan varios factores que concurren a explicar la intensidad y extensión, social y espacial, de la protesta venezolana. Destaca especialmente el rechazo al bipartidismo venezolano y aun a la democracia, tal como fue concebida en los pactos constitutivos de 1958 en adelante por parte de la mayoría del electorado a lo largo de los años noventa, que llevó a la descomposición y final colapso del viejo sistema político. Desde inicios de la década, el repudio a los políticos tradicionales promovió una alta abstención electoral y la emergencia de nuevos actores sociales y políticos que buscaban sustituir en la representación y mediación a los partidos AD y Copei, que vieron disminuir año a año, elección a elección, su arraigo en el electorado. Fenómenos

electorales como Andrés Velázquez y su partido La Causa Radical en las elecciones regionales de 1989, triunfos como el de Aristóbulo Istúriz en la Alcaldía de Caracas en 1992 o el de Rafael Caldera y su movimiento electoral Convergencia en 1993, van señalando el proceso de declive del sistema. El triunfo de Chávez y su alianza política en las elecciones nacionales de 1998, y la desaparición de candidatos propios de esos dos partidos en esa carrera, es emblemático para señalar el agotamiento definitivo de ese modelo político.

El triunfo del presidente Chávez en 1998 cristalizó en el Estado una alianza de fuerzas políticas representativas de un proyecto político de naturaleza antineoliberal para Venezuela. Esta propuesta, hasta la fecha, no está completa ni claramente diseñada, pero en el discurso de los actores y en algunas de sus líneas básicas de política pública se marca distancia evidente con las tendencias neoliberales y liberales que las alianzas políticas de los noventa habían dado al Estado. Se expresan orientaciones distintas a la doctrina neoliberal en la Constitución de 1999 en aspectos como la centralidad del Estado como regulador de la economía; el rechazo a orientaciones tendentes a la privatización de la industria petrolera, el énfasis en la universalidad de los derechos sociales y el deber del Estado de garantizarlos. La propuesta política del presidente Chávez ha ido recibiendo, en la medida en que ha ido buscando su consolidación a través de la nueva Constitución y un nuevo marco institucional, una cada vez más cerrada oposición, principalmente proveniente de factores de poder que no comparten o se sienten afectados en sus intereses por las orientaciones antineoliberales, destacando de manera notoria grandes corporaciones nacionales y transnacionales, medios de comunicación privados, propietarios de tierras rurales, gerencia ejecutiva de Pdvsa y otros. También se han ido agregando a estos sectores, organizaciones de la clase media y alta, partidos políticos y ciertos sectores sindicalizados de la economía formal. Hacia finales de 2001, tras las organizaciones empresariales representadas en Fedecámaras y las sindicales representadas en la CTV, se fue cohesionando un amplio movimiento de oposición que ha buscado en la movilización callejera, pero también por otras vías (como alianzas militares para salidas no democráticas), derrotar la opción política representada por el Gobierno de Chávez.

Esta lucha entre actores que representan dos proyectos políticos que se oponen ha impulsado una intensa movilización de calle, dándole un protagonismo a las movilizaciones políticamente motivadas que se crecen en relación con las protestas por demandas socioeconómicas, tradicionalmente mayoritarias en la política venezolana de la calle (v. Provea, años 1999 en adelante). En el año 1999 las protestas de motivaciones políticas y civiles fueron incentivadas por el proceso constituyente, que abrió para ciertos actores marginales hasta entonces en la sociedad, la oportunidad de hacer incluir sus intereses y demandas en la nueva carta magna.

Fue una estructura de oportunidades políticas abierta para sectores como los indígenas, mujeres, evangélicos, pensionados y jubilados, etc., que al calor del proceso se fortalecieron en términos organizativos al utilizar la acción colectiva para hacerse ver y oír de los diputados de la Asamblea Constituyente. Tres años después, las cifras de 2002 revelan un nuevo aumento en la movilización por motivos políticos, que ahora saltan a 30 por ciento del total de protestas. En este caso, las impulsa la exacerbada polarización política que se produce en los meses finales de 2001, por la inconformidad de sectores sociales y económicos con respecto a diversos aspectos de la gestión gubernamental, así como por notorios errores en la conducción política de los partidarios del proyecto “chavista” (Parker, 2002:11-14).

Entre los factores que en el año 2001 provocaron las más acentuadas desavenencias entre Gobierno y sectores de la oposición se encuentran: a) el contenido de algunas de las leyes aprobadas en noviembre por el Ejecutivo Nacional, en especial las leyes de Hidrocarburos, Tierras y Pesca que tocan intereses económicos poderosos y adversos al proyecto nacional-popular del Presidente; b) la forma en que estas leyes fueron aprobadas, a través de facultades especiales que le son otorgadas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional mediante la figura constitucional de la Ley “Habilitante”. Grupos económicos afectados denunciaron antes y después de aprobadas estas leyes lo antidemocrático de este procedimiento; c) la política educativa del Gobierno, tanto en sus contenidos como en la forma poco dispuesta a la negociación en que buscaba ser aprobada en el Congreso. La Ley de Educación ha sido adversada por sectores de la educación privada y religiosa; c) la política sindical de enfrentamiento frontal con los dirigentes tradicionales de este sector social, que pareció amenazar la existencia misma de la representación sindical en el nuevo orden político, provocando una airada oposición de la dirigencia tradicional, d) jugó un papel clave en el continuo aumento en la calle de organizaciones sociales de clase media y alta, la actitud intransigente y autoritaria con que el Gobierno actuó ese año y hasta abril de 2002, cuando desestimó y aun despreció la política de la calle desarrollada por la oposición en esos meses, negándose a atender los reclamos por participar y negociar sus intereses con el Gobierno que estos sectores hacían (v. López Maya, 2002a). La radicalización e intransigencia que ambos bloques políticos desarrollarían en los primeros meses de 2002, desembocarían en el paro del 9 de abril y de allí en la marcha insurreccional y el golpe de Estado del 11.

El golpe de Estado y su desenlace 48 horas después, que repuso al Presidente en el poder, ahondaron el crítico clima político que se había desarrollado entre diciembre y abril. A partir del retorno del Presidente, los sectores de apoyo al Gobierno recuperaron la iniciativa política en la calle, movilizándose y organizándose

masivamente, mientras el sector de oposición, también en uso de la calle, y organizándose a toda velocidad, buscaba mantener su protagonismo. Los liderazgos y organizaciones de ambos bloques han considerado la acción callejera dentro de sus principales tácticas en la lucha por el predominio político, con lo cual ésta se ha potenciado en creatividad, participación y contenidos políticos.

Existen, así mismo, otros factores externos a los actores mismos que también han propiciado esta intensa y contradictoria movilización, tanto de los sectores de extracción popular en apoyo al Presidente y su proyecto político, como de sectores de ingresos medios y altos que apoyan a las organizaciones y fuerzas de oposición: un contexto internacional donde la protesta callejera se ha convertido en un arma política de primer orden para modificar las relaciones mundiales de poder. En los años recientes, movilizaciones por la ciudadanía de los excluidos, llámense indígenas, mujeres, homosexuales, negros, enfermos del sida, etc., como acciones colectivas para empujar demandas nacionales, de democracia, por la autonomía de naciones o pueblos, y más recientemente, las luchas de resistencia a un orden económico injusto, los movimientos antiglobalización, las marchas contra la guerra de Irak y por la paz, toda esta dinámica transmitida por medios de comunicación globalizados influencia, alimenta e incentiva las luchas venezolanas.

## CONCLUSIONES

En la exploración de dos años de Gobierno en ambos períodos aquí realizada, hemos podido constatar una intensa movilización y una alta confrontación en la política de la calle. El enfoque comparativo ha puesto de manifiesto, en términos de naturaleza, formas y actores de la protesta, las siguientes similitudes y diferencias:

1. En términos de naturaleza de la protesta, durante los años revisados del primer Gobierno de Caldera se observa un porcentaje de protestas violentas que ronda el promedio del 17,2 por ciento del total de reseñas. Aunque hay una ligera baja en el año 1973 con relación a 1970, es ésta una tendencia tenue, poco significativa. En el caso de los dos años revisados del Gobierno de Chávez, por el contrario, hay una notoria diferencia entre el número de reseñas violentas del primer año (20,2 por ciento del total) y el que recoge Provea para el 2001-2002 (10,6 por ciento). Aquí el promedio para ambos años daría 15,4 por ciento, lo que es menor al promedio de los dos años revisados del período de Caldera. En el Gobierno de Chávez varios factores explican esta tendencia a la baja de la violencia en la protesta, que es una tendencia continua registrada por los informes de Provea entre 2000 y 2001: a) la represión violenta a las manifestaciones pacíficas viene dis-

minuyendo desde mediados de los noventa (v. López Maya, 2003); b) han ocurrido cambios en la conducta de las autoridades y los cuerpos de seguridad, que ahora reconocen y aceptan el derecho a la manifestación pacífica y criminalizan menos que en el pasado la protesta callejera; c) también influye en este cambio la salida a la calle de sectores de clase media y alta, ante los cuales la matriz de opinión y la conducta de los cuerpos de seguridad también se hace más respetuosa de este derecho humano.<sup>6</sup>

Otro aspecto diferente entre ambos períodos es que en los años del Gobierno de Caldera, las protestas prevalecientes durante el año 1970 son de naturaleza confrontacional, seguidas de las violentas, mientras que en 1973 predominan largamente las protestas de naturaleza convencional, seguidas de las de carácter confrontacional. Se revela así una tendencia clara a la baja de la beligerancia de la política de la calle. La política de pacificación, la intervención de las universidades y la nueva Ley de Universidades, combinados a su vez con una represión severa y en muchos casos violenta de la protesta callejera –legitimada por un bloque hegemónico estable y fuerte– son factores explicativos de este fenómeno. Durante los años de Gobierno de Chávez no existen situaciones análogas y la protesta sigue dentro de la naturaleza altamente confrontacional que le da la feroz lucha hegemónica entre dos bloques políticos que representan proyectos e intereses distintos para la sociedad venezolana.

2. En relación con las formas de la protesta, en ambos períodos prevalecen los paros laborales como la principal arma utilizada por actores que presionan a las autoridades y patronos. Pero en los años de Caldera, las otras formas del repertorio no son tan diversificadas como durante los años de Chávez. En el Gobierno de Caldera las otras formas significativas de protestar son el disturbio, la toma de establecimientos públicos, y en 1973 encontramos una alta utilización del comunicado público para hacer llegar las quejas a la autoridad. Marchas y concentraciones son escasas, cierres de vías casi inexistentes. En los años de Gobierno de Chávez, en contraste, además de los disturbios, que son la segunda forma más frecuente del año 1999, ha alcanzado gran difusión los cierres de vía como forma de protesta, proliferando así mismo concentraciones y tomas de establecimientos, marchas, huelgas de hambre, caravanas y una serie de nuevas formas de protesta donde destacan los cacerolazos, las vigiliadas, las autoflagelaciones. Esta diversificación del repertorio constata la presencia de un “ciclo de protestas” en la sociedad venezolana aún sin resolución (López Maya, 1999).

<sup>6</sup> Al igual que en el informe de Provea, la tendencia aquí observada no toma en cuenta el evento cruento del 11 de abril por no haberse logrado hasta ahora saber la verdad de lo sucedido y los responsables.

3. Los actores de la protesta en los años de Caldera provienen de manera predominante del sector educativo y del sector trabajador. En 1970 fueron los estudiantes de educación media y universitaria, pero también los maestros protagonistas de la protesta callejera, junto a trabajadores y obreros del sector público y vecinos de sectores populares. En 1973 también se observan movilizaciones de trabajadores del campo y de la agroindustria. Algunas importantes huelgas tuvieron lugar en ese gobierno como la huelga en Sidor y en otras industrias básicas de Guayana. Durante los primeros años de Chávez los actores en la calle son innumerables: si bien siguen siendo muy protagónicos actores del sector educativo, también se observa la visibilidad de otros que en el pasado no salían o salían poco, junto a nuevos actores sociopolíticos: choferes, trabajadores petroleros, presos, desempleados, jubilados y pensionados, buhoneros, médicos, indígenas y grupos políticamente motivados forman parte de este nutrido reparto. Esto refuerza la característica del ciclo de protestas que reviste el período y corrobora así mismo que la actividad política se ha reactivado en la sociedad venezolana, emergiendo organizaciones construidas para tal fin que hacen uso de la actividad de la calle como una arma importante para alcanzar sus objetivos.

Al explorar en los factores que impulsan y moldean la protesta en ambos períodos, constatamos que en los años de Caldera comenzaban a revelarse en las condiciones socioeconómicas señales de disfuncionamiento y declive del modelo de sustitución de importaciones. Esto resultaba en problemas de empleo, salario y consumo en los sectores populares, sobre todo en ciertas áreas productivas, que servían como escenario general desde donde se impulsaba la protesta. Esto se combinó con factores político-institucionales. Dirigentes sindicales afines al partido AD –en estos años ubicados en la oposición– y dirigentes y organizaciones de izquierda, algunos de los cuales hasta poco antes se habían desempeñado en la lucha armada, contribuían a darle fuerza a los paros y huelgas de la zona de Guayana y otros sectores productivos. En el caso del movimiento estudiantil, éste se mantenía en la calle desde 1958: la protesta callejera es su forma básica de interpelar la autoridad. Sin embargo, en los años de Caldera esta protesta estaba menos supeditada a los dirigentes y organizaciones de izquierda de los años previos –comprometidos con la lucha armada–, estando más vinculada a aquellas organizaciones que lideraban el proceso de renovación académica.

Durante los años de Chávez, las condiciones socioeconómicas de recesión, penuria fiscal y desorientación de las políticas destinadas a detener el declive de la actividad económica –que lleva ya dos décadas– y recuperar el crecimiento, son caldo de cultivo por excelencia de la movilización social. Sin embargo, en estos años distintivos factores político-institucionales mantienen la situación en el marco de un ciclo de protestas. La más decisiva es la aguda lucha hegemónica que se

libra entre dos proyectos políticos para el país, ambos respaldados por importantes sectores sociales y políticos. Esto, que se expresa en la visibilidad y fuerza que ha venido adquiriendo la protesta políticamente motivada, se complementa con otros aspectos que alimentan una estructura de oportunidades propicia a la protesta masiva en términos de número, actores y formas: la debilidad y mediocridad de los canales de mediación y representación entre los diversos intereses sociales y el Estado, el proceso de descomposición del aparato estatal, la debilidad y fractura de las élites, sobre todo políticas, y un factor externo como lo es la globalización en los medios de comunicación, que por una parte, muestra las resistencias mundiales a la globalización neoliberal, contagiando y vinculando a sectores diversos de la sociedad venezolana con estas luchas. Pero, por otra parte, la fuerza de los medios de comunicación privados como creadores de opinión en una sociedad “de consumidores”, parcializados también en esta lucha a favor de los sectores que se oponen al Gobierno, ha contribuido en hacer esta lucha especialmente aguda y sostenida en el tiempo.

Aunque las protestas entonces y ahora no se revelan como especialmente distintas: el número, actores y formas guardan importantes similitudes, podemos concluir, sin embargo, que en el presente, a diferencia del pasado, las protestas forman parte de una confrontación más general en la sociedad. Esta confrontación tiene por objetivo una transformación significativa del modo de vivir en sociedad de los venezolanos y del modo de relacionarse con el poder. Por lo pronto, las nuevas formas de lucha y la inmensa gama de actores sociopolíticos en la calle revelan la hondura de la transición venezolana en curso. A diferencia de esta situación, durante los años de Caldera, una hegemonía relativamente segura de los signatarios de Punto Fijo y otros pactos constitutivos realizados a partir de 1958, propiciaba una movilización que si bien era numerosa parecía centrada sólo en ciertos actores excluidos de los beneficios de los pactos. Actores y formas eran relativamente pobres en comparación con los años de ahora. Por otra parte, a diferencia del presente, el Gobierno de Caldera respondía a la protesta con mano firme, reprimiendo con violencia muchas veces. En ese sentido, ahora, a diferencia de antes, el derecho de los ciudadanos a la manifestación pacífica se ha fortalecido, ya que desde mediados de los noventa se constata una disminución significativa de la represión de los cuerpos de seguridad a quienes hacen política en la calle y un mayor respeto y valoración social de la protesta, venga de donde venga.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APONTE, C. (1984). “Posiciones empresariales venezolanas ante el Pacto Andino”. *Cuadernos del Cendes*, n° 4, pp. 95-136. Caracas.

CABALLERO, M. (1998). "Gobierno de Rafael Caldera, 1969-1973". *Gran Enciclopedia de Venezuela*, vol. 8, pp. 235-269, Caracas, Editorial Globe.

DEL BÚFALO, E. (2002). "Las reformas económicas en América Latina". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 8, n° 2, pp. 129-184.

ELLNER, S. (1988). *Venezuela's Movimiento Al Socialismo. From Guerrilla Defeat to Innovative Politics*. Durham, North Carolina: Duke University Press.

LÓPEZ MAYA, M. (en prensa). "The Struggle for Hegemony in Venezuela: Violence, Popular Protest and the Future of Democracy", en Burt, J.M. y P. Mauceri, *Social Conflict and Violence in the Andes*.

\_\_\_\_\_ (2003). "Movilización, institucionalidad y legitimidad en Venezuela". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, n° 1, enero-abril, pp. 211-228.

\_\_\_\_\_ (2002a). "El paro cívico del 10 de diciembre". *Nueva Sociedad*, n° 177, enero-febrero, pp. 8-12.

\_\_\_\_\_ (2002b). "Una aproximación al golpe de Estado y sus causas". Caracas, inédito.

\_\_\_\_\_ (2000). "La protesta popular en la Venezuela contemporánea: enfoque conceptual-metodológico y fuentes", en Rodríguez, J.A., *Visiones del oficio*, pp. 399-412. Caracas: Academia Nacional de la Historia-Comisión de Estudios de Postgrado-Universidad Central de Venezuela.

\_\_\_\_\_ (1999). "La protesta venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)", en López Maya, M., *Lucha popular, democracia y neoliberalismo. La protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, pp. 211-238. Caracas: Nueva Sociedad.

LÓPEZ MAYA, M. y L.E. Lander (2001). "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", en Sader, E., *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, pp. 231-254. Buenos Aires: Clacso.

LÓPEZ MAYA, M.; L. Gómez Calcaño y T. Maingon (1989). *De Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y hegemonía en Venezuela*. Caracas: Editorial Acta Científica Venezolana.



LÓPEZ MAYA, M.; D. Smilde y K. Sterphany (2002). *Protesta y cultura en Venezuela. Los marcos de acción colectiva en 1999*. Caracas: Faces-Cendes-Fonacit.

MOORE, B., Jr. (1978). *Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt*. EE UU, MacMillan Press Ltd.

PARKER, D. (2002). “Debilidades en la conducción política del proceso también facilitaron el golpe”. *Observatorio Social de América Latina*, n° 7, pp. 231-254, junio, Buenos Aires, Clacso, junio.

PROVEA (1998- ). *Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informes anuales*. Caracas: Provea.

TARROW, S. (1996). *Power in Movement*. Nueva York: Cambridge University Press.

URBANEJA, D. (1997). “Caldera, Rafael, Gobierno de”, entrada en Fundación Polar, *Diccionario de Historia de Venezuela*, t. 1, Caracas.